Denunciada por el Ministerio fiscal la comisión de un delito contra la independencia del Estado, imputándolo á un Obispo y fundándolo en el texto de la publicación de un Motu Proprio, debe proseguirse el juicio de oficio.

DENUNCIA

Excmo. Señor:

El señor Ministro del Culto ha remitido al infrascrito un expediente en el cual, entre otros documentos, figura el Boletín Eclesiástico de la diócesis de Puno correspondiente á julio último, manifestándole, á fin de que emita dictámen, que en dicho órgano oficial del Obispado, se publica una convocatoria á sínodo diocesano hecha por el ordinario sin previa licencia del Gobierno, y tambien un Motu Proprio del Romano Pontífice en cuyo favor no está recabado el exequatur.

El Illmo. doctor Valentín Ampuero convoca, en efecto, á un segundo sínodo diocesano para el 6 de Enero de 1914.

La ley 1, título 8º, libro 1º, de la Recopilación de Indias, que en lo concerniente al patronato forma parte de nuestra legislación, dispone que en el caso de tal convocatoria se debe "dar cuenta" al patrono para que advierta lo que fuere conveniente. Cuidase así, por lo que en pró de la mayor vigilancia encomienda subsidiaria-

mente tal atribución á los Prefectos el artículo 50 de la ley de organización de la República, que no se introduzcan novedades en la disciplina exterior de la Iglesia, ni se usurpe el patronato, ni tampoco las regalías nacionales.

En ejercicio de aquel derecho de los reyes católicos, que hoy pertenece al Estado, la resolución gubernativa de 16 de Septiembre de 1868, motivada por la gestión del entonces Obispo de Puno señor Huerta, autorizó la reunión del primer sínodo diocesano, confiando el cargo de Asistente Nacional al Fiscal doctor Hurtado.

Siendo la convocatoria para enero próximo, todavía es oportuna la comunicación al Gobierno.

El procedimiento del Obispo, sin licencia, bajo ese punto de vista no constituye, en consecuencia, por ahora, infracción punible. Sólo da margen á fin de mantener la subordinación, á que el Prefecto de Puno le haga la exhortación que indica el citado artículo 50 de la ley de organización interior de la República.

En el Motu Proprio expedido el 9 de Octubre de 1911 en pró de la "inmunidad" del clero, "establece y ordena" el Romano Pontífice, "sin que obste nada en contrario", que "toda persona privada, laica ó eclesiástica, hombre ó mujer, que sin permiso de la autoridad eclesiástica, cite ú obligue á cualquiera persona eclesiástica, sea cualquiera su dignidad en el orden, á comparecer

ante los tribunales laicos, bien en causa civil, bien en causa criminal, y la obligue á presentarse allí públicamente, incurra en la excomuni6n *latæ sententiæ speciali modo*".

Este documento es en realidad una categ6rica prohibici6n de la instancia perfectamente correcta, muchas veces exigida por la vindicta p6blica, á cuyo ejercicio impone tan severa pena can6nica.

Proclama existente el fuero personal, sin embargo de declarar abolido ese odioso privilegio el art6culo 6 de nuestra Carta, y en consecuencia atribuye á juzgados privativos, que fuera de lo espiritual s6lo pueden conocer en juicio sobre divorcio y nulidad del matrimonio cat6lico, la amplia jurisdicci6n que exclusivamente á los tribunales comunes compete.

Prohíbe que los fanáticos y los ignorantes—que especialmente abundan en nuestras serranías, entre los tan maltratados ind6genas—para quienes sobre las leyes de la Rep6blica imperan los mandatos del Vaticano, hagan efectivas las responsabilidades civiles y criminales que, cual lo comprueban los archivos del foro, con harta frecuencia asumen sacerdotes inescrupulosos ó delincuentes.

El art6culo 94 inciso 19 de la Constituci6n señaala entre las atribuciones del Jefe del Poder Ejecutivo, la de conceder ó negar el pase á los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos

pontificios, con asentimiento del Congreso; y oyendo previamente á la Corte Suprema, si fueran relativos á asuntos contenciosos.

Inserto el Motu Proprio en el Boletín Eclesiástico de la diócesis de Puno, á pesar de la extrañeza que produce, no es dudosa su autenticidad.

No estando ni siquiera solicitado el pase de tal documento, hasta hoy ignorado por el patrono, que desconoce la soberanía de la Nación y perturba el orden público, el curso que se le da, publicándolo en dicho órgano oficial á fin de que surta insidiosamente sus efectos sediciosos, constituye el delito contra la independencia del Estado, al que se contrae el artículo 116 inciso 1° del Código Penal; delito pesquisable de oficio en el fuero común, porque al Ministerio Fiscal está impuesta la obligación de denunciarlo.

Ese rescripto no ha podido insertarse en el mencionado órgano oficial, sino por orden del prelado que rige la diócesis.

Tal es el sentido del dictamen emitido ante el Supremo Gobierno.

En cumplimiento de su misión, el Fiscal reproduce sus consideraciones ante VE., á fin de que, en ejercicio de la jurisdicción especial que le confiere el artículo 5° inciso 3° del Código de Enjuiciamientos Penal, se digne pedir al Ministerio del Ramo el expediente de la materia; y apreciándolas en los dos puntos á que se contraen,

se digne expedir contra el Obispo de Puno doctor Valentín Ampuero, el auto cabeza de proceso á que ha lugar.

Lima, á 2 de octubre de 1913.

SEOANE.

Lima, 24 de Octubre de 1913.

Por interpuesta la denuncia que formula el Señor Fiscal de esta Excelentísima Corte contra el Ilustrísimo Señor Obispo de Puno, doctor don Valentín Ampuero, por el delito á que se contrae el inciso primero del artículo 116 del Código Penal, instrúyase el correspondiente sumario con las citaciones de ley y del procurador de turno, que se nombra defensor de reos ausentes; recíbese la inductiva del expresado señor Obispo; absuélvase la citas que resulten y practíquese las demás diligencias necesarias, librándose al efecto despacho á la Ilustrísima Corte Superior de Puno para la actuación de las diligencias apuntadas.

Rúbrica de los señores: *Elmore, Villa García Leguía y Martínez.*

El voto de los que suscriben el el siguiente: La denuncia del señor Fiscal hace responsable al Ilustrísimo Obispo de Puno Monseñor Valentín

Ampuero, del delito contra la independencia del Estado, por cuanto se supone que ha hecho publicar un documento emanado de la Santa Sede sin que haya sido recabado el correspondiente *exequatur*. La imputación, pues, es de un abuso contra la libertad de imprenta, justiciable en la vía y forma que determina la ley de la materia, dictada tanto para hacer efectivo el precioso derecho que todos tienen de escribir, publicar y circular sus ideas, "como para que no se haga ilusorio por los abusos y el desorden" Sería peligroso para la libertad de imprenta aceptar que el descubrimiento del autor ó editor de un escrito cuya publicación constituye un abuso de esa libertad, se hiciera por los jueces del fuero común, siguiendo los trámites de los juicios criminales de oficio, y pudiendo ordenarse la detención precautoria de la persona sindicada como culpable, cuando, en el concepto del Juez y aún de las autoridades de policía, existieran indicios de culpabilidad. No está, por lo tanto, expedita la jurisdicción de la Corte Suprema para abrir juicio criminal contra el Obispo de Puno, y el Tribunal debe inhibirse de conocer de la denuncia entablada por su Ministerio; pudiendo el Señor Fiscal, si lo tuviere á bien, ejercitar la atribución que le señala el inciso 5º del artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Rúbricas de los Señores: *Eguigúren, Eráusquin.*

Gallagher y Canaval.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. señor:

El personero del señor Obispo de Puno doctor Ampuero, niega la competencia del fuero común para entender en el juicio que á ese funcionario abre el auto cabeza de proceso, por el delito contra la independencia del Estado á que se contrae el artículo 116 inciso 1º del Código Penal.

Fúndase principalmente en que la publicación de un Motu Proprio pontificio en el Boletín Eclesiástico de la diócesis, no puede apreciarse, caso de juzgamiento, sino como delito de imprenta, sujeto en consecuencia á la jurisdicción privativa que establece la ley de la materia de 12 de noviembre de 1823.

La afirmación es errónea.

No todos los hechos delictuosos, para cuya perpetración se hace uso de la prensa, son delitos de imprenta.

Sólo tienen legalmente tal caracter los abusos de la libertad del pensamiento cuyo principio proclama la mencionada ley.

Esos abusos, minuciosamente enumerados en

el artículo 6 y penados en el 16, consisten en la publicación de máximas ó doctrinas contra la religión católica, la Constitución de la República, las que incitan á la rebelión, á la sedición, al motín, las que injurian en libelos infamatorios que tachan la vida privada y mancillan la honra.

Tales son las producciones del pensamiento dañoso que la ley somete á los jueces de hecho para que, á mérito de sus teorías y afirmaciones, con solo su lectura, aprecien si ha ó no lugar á formación de causa.

La publicación de una pieza oficial, auténtica ó apócrifa, no se halla inclusa entre esos abusos punibles.

Si publicada, hubieren aquellos jueces de examinar las máximas y doctrinas que contenga, sería aplicable la ley de imprenta.

Pero tal no es el caso. El delito está en la publicidad del documento; ó sea—no en las ideas trastornadoras ó malévolas de quien lo publica—sino en el hecho cuya apreciación no requiere exámen de equidad, porque es efectivo, y también porque no basta por sí solo para acreditar que se encuentran satisfechos los previos requisitos indispensables de cuya prescindencia depende la delictuosidad.

En vista del Motu Propio del 9 de Octubre de 1911, inserto en el Boletín eclesiástico de la diócesis de Puno ¿cómo sabrían los jueces de hecho, para dar en conciencia su voto favorable ó ad-

verso, si está ó no autorizado tan extraño documento con el *exequatur*, previo informe de la Exema. Corte Suprema, que para su curso exige el artículo 94 inciso 19 de la Constitución?

Por no imponer castigo á tal publicación la ley de imprenta, si fuese ésta la que se aplicare, resultaría que, á pesar de la pena que señala el Código Penal, el autor de la infracción delictuosa quedaría impune.

Son innecesarias las últimas consideraciones para dejar de relieve la improcedencia de la declinatoria deducida.

Basta, en efecto, tomar en cuenta que la publicación de piezas oficiales, no es delito privativo de imprenta, por cuanto, como está dicho, no figura entre los abusos concretados á teorías, injurias y calumnias que declara tales la ley pertinente; ni á ella debe sujetársela, porque no lleva invítos todos los elementos que han de poseer las únicas confiadas al criterio de los jueces de hecho.

No siendo privativo, esa publicación, si entraña delito, está comprendida entre los de la regla general; lo mismo que el homicidio, el robo y otros en que tiene obligación de acusar el Ministerio Fiscal, cuyo juzgamiento común procede de oficio cuando el Juez del Crimen adquiere conocimiento de su perpetración, sea cual fuere, sin exceptuar la prensa, la fuente informativa.

El Fiscal dice, en conclusión, que puede VE. desestimar la excepción á que ha ocurrido el personero del enjuiciado.

Lima, 19 de noviembre de 1913.

SEOANE.

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Lima, 20 de diciembre de 1913.

Autos y Vistos; de conformidad con el dictámen del señor Fiscal, y estando á los términos de su denuncia: declararon sin lugar la excepción jurisdiccional deducida á fojas 23 por el apoderado del Ilustrísimo Señor Obispo de Puno doctor Valentín Ampuero; y los devolvieron.

Rúbricas de los señores: *Elmore, Villa García, Leguía y Martínez.*

Nuestro voto es porque se declare fundada la excepción, por las razones que se consignan en el voto que emitimos al expedirse el auto de enjuiciamiento, corriente á fojas 21.

Eguigúren—Eráusquin.

Gallagher y Canaval.

DICTÁMEN FISCAL

De los dos delitos que se enumeran en la denuncia de fojas 1, únicamente por el contrario á la independencia del Estado, previsto y penado por el artículo 116 inciso 1º del Código Penal, se ha dictado auto de cabeza de proceso contra el Illmo. Obispo de la Diócesis de Puno, Monseñor Valentín Ampuero, y se manda instruir el correspondiente sumario, segun aparece del de fojas 21.

Empero, como á nombre de dicho Diocesano, se ha deducido artículo jurisdiccional, basado en lo que dispone la ley privativa de delitos por abuso de la libertad de imprenta, después de ser declarado sin lugar en auto de fojas 25, se ha concedido la apelación de él interpuesta.

Conociendo VE. en grado de lo resuelto en la anterior instancia, no podrá menos de pronunciarse en el sentido de la confirmatoria del apelado, tanto por las muy fundadas, poderosas é incontestadas razones del dictamen fiscal de fojas 24, como porque debe tenerse en cuenta que si para algo se toma en consideración la circunstancia de haber sido publicado en el "Boletín Eclesiástico", cuyo ejemplar obra á fojas 3, el *Motu Proprio*,—que es la prueba material del delito objeto del juzgamiento—es precisamente por

ser la forma elegida para hacer más práctica, eficaz y segura su observancia y acatamiento dentro los límites de la jurisdicción episcopal en que que debería regir.

Luego, dista mucho el fundamento ó forma artificiosa con que se ha querido revestir la excepción jurisdiccional que se ventila, del recto y legal sentido en que está concebida la ley de imprenta, que, según se ha dicho, solo comprende los delitos de abuso de la libertad de imprenta.

Por los razonamientos expuestos y por los del citado dictamen fiscal, que se reproducen; el infrascrito es de parecer que VE. se sirva confirmar el auto apelado corriente á fojas 25, salvo mejor opinión.

Lima, 7 de febrero de 1914.

GADEA.

RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Lima, 18 de abril de 1914.

Autos y Vistos; de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal: confirmaron el auto de fojas 25, su fecha 20 de diciembre de 1913

que declara sin lugar la excepción jurisdiccional deducida á fojas 23 por el apoderado del Iltmo. Sr. Obispo de Puno doctor Valentín Ampuero; y los devolvieron.

Rúbricas de los señores: *Ribeyro, Barreto, Washburn.*

Nuestro voto es porque se revoque el auto apelado y se declare fundada la excepción de jurisdicción deducida por el apoderado del Iltmo. Obispo de Puno, por las razones en que se funda el voto emitido á fojas 21 por los señores Eguigúren y Erásuquin.

Rúbricas de los señores: *Almenara, Ortiz de Zevallos.*

Gallagher y Canaval.

Seguido el sumario respectivo; por fallecimiento del Obispo enjuiciado, se cortó la prosecución del juicio en 20 de marzo de 1915.